

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

| | |
|------------------|--|
| PROCESO | ORDINARIO APELACIÓN AUTO |
| DEMANDANTE | CRISTIAN PORTILLA PLAZA |
| DEMANDADO | TOUCHSTONE GOLD HOLDINGS S. de R.L. |
| RADICADO | 05001-31-05-023-2019-00924-01 |
| ORIGEN | JUZGADO VEINTITRÉS LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN |
| TEMAS Y SUBTEMAS | NULIDAD PROCESAL – INDEBIDA NOTIFICACIÓN |
| DECISIÓN | MODIFICA |

AUTO INTERLOCUTORIO No.018

Medellín, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado el presente asunto en la SALA TERCERA DE DECISION LABORAL, según consta en Acta N°004 de 2023, se procede a dictar AUTO INTERLOCUTORIO en orden a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad **TOUCHSTONE GOLD HOLDINGS S. de R.L.**, contra el Auto Interlocutorio No. 525 del 4 de agosto de 2022, proferido por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, a través del cual rechazó de plano el incidente de nulidad propuesto por aquella parte.

ANTECEDENTES

A través de demanda ordinaria laboral, el señor **CRISTIAN PORTILLA PLAZA** deprecó que: **1)** Se declare que entre este y la sociedad **TOUCHSTONE GOLD HOLDINGS S. de R.L.**, existió un contrato de trabajo vigente entre enero y octubre de 2018, culminado de manera unilateral e injusta por parte de la empleadora. **2)** En consecuencia, pidió condenar a la demandada al pago de las prestaciones sociales y vacaciones que le son adeudadas, la indemnización por despido injusto, y el pago de los aportes a seguridad social en pensión no cancelados o pagados de manera deficitaria. **3)** Así mismo, reclamó el pago de la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 CST y la indexación de las sumas resultantes.

Mediante Auto No. 1499 del 23 de septiembre de 2019 el Juzgado de primer grado admitió la demanda y dispuso la notificación y el correspondiente traslado a la accionada por el término de diez (10) días, conforme lo establecido en el artículo 41 CPLSS (Archivo 04 ED).

Posteriormente, a través del Auto No. 039 del 27 de enero de 2020 (sic), el A *quo* dispuso, en virtud de lo consagrado en el numeral 2° del artículo 291 CGP, la remisión de la citación para notificación personal a través del correo electrónico registrado por la empresa accionada en el Certificado de Existencia y Representación Legal (Archivo 13 ED).

Más adelante, por Auto N° 250 del 23 de marzo de 2021, en aplicación de lo previsto en el artículo 8° del Decreto 806 de 2020, el Juzgado de primera instancia tuvo por notificada a la entidad accionada, y ante la falta de pronunciamiento, decidió tener por no contestada la demanda (Archivo 26 ED).

INCIDENTE DE NULIDAD

De acuerdo con lo anterior, el apoderado de la parte accionada promovió incidente de nulidad sustentado en la causal descrita en el numeral 8° del artículo 133 CGP, como quiera que, en su criterio, existió una indebida notificación.

Para el efecto arguyó que, dentro de los poderes del Juzgador, se encuentra el de ejercer el control de legalidad en cada etapa del proceso, ello con el fin de sanear los vicios que pudieran configurar nulidades u otras irregularidades del proceso (Art. 42 y 132 CGP).

En ese sentido indicó que, desde la admisión se dispuso la notificación conforme a las previsiones del artículo 41 CPLSS, norma que establece en el numeral 1° del literal A, que la notificación del auto admisorio de la demanda debería efectuarse de manera personal, trámite agotado por la parte actora, ante lo cual el representante legal de la sociedad acudió a las instalaciones del despacho, ubicado en el Edificio Banco de Londres – Medellín, según lo precisado en la citación; sin embargo, no le fue permitido el ingreso a esa edificación, bajo el argumento que la dependencia no estaba ubicada en esa edificación, quedando a la espera, entonces, del agotamiento del respectivo aviso en los términos del artículo 292 CGP.

Con base en lo anterior, puso en evidencia la comisión varios errores cometidos en la anterior actuación, el primero, haber citado a la parte accionada para notificarse en una dirección errada respecto de la ubicación del Juzgado; segundo, que dio instrucciones e información jurídica errónea a la demandada, como quiera que la notificación por aviso no aplica en materia de procedimiento laboral, desatención que incluso fue avalada por el Juzgado de primer grado que, en Auto del 23 de octubre de 2019, expuso que la parte realizó debidamente el procedimiento notificadorio, autorizando a enviar la citación por aviso, misma que, en efecto, agotó la parte interesada, precisando como dirección del Juzgado, nuevamente el citado edificio, y en donde otra vez le fue negado el acceso al representante de la sociedad, por no ser el sitio de ubicación del Juzgado.

En ese contexto, resaltó extrañarle los errores en la dirección cometidos por el apoderado de la parte, sumado a las indicaciones erróneas en punto del tema jurídico, solicitando además el emplazamiento del extremo accionado bajo el argumento de negarse a la notificación, cuando lo cierto es que esta no acaeció por una situación que derivó de la actuación del mismo actor, reprochando también que el Juzgado, incluso ordenó la aplicación de los artículos 108 y 293 CGP, a partir de lo cual dispuso el emplazamiento de la empresa, actuación de la que dijo, el Despacho cometió otro error, como quiera que, ordenó el emplazamiento y luego el nombramiento del curador, pero en la citación por aviso se dispuso el orden distinto para estas actuaciones, que es finalmente como debe efectuarse en el ámbito del proceso laboral, según el contenido del artículo 29 CPLSS, que dista del trámite emplazatorio de la codificación procesal civil, lo que denota una actuación violatoria del debido proceso y el derecho de defensa de la parte pasiva.

Que, no obstante, el 11 de agosto de 2020 el apoderado de la parte accionante solicitó al Juzgado que le permitiera efectuar el emplazamiento conforme lo establecido en el artículo 10 del Decreto 806 de 2020, desobedeciendo lo que ya había ordenado el Despacho, pese a

que, para esa data se habían relajado las medidas de confinamiento en las entidades gubernamentales y privadas, estando en la posibilidad de efectuar el emplazamiento en los términos ordenados.

Continuó exponiendo que, pese a las múltiples solicitudes impetradas por el demandante, en últimas solicitó que mejor se diera aplicación al artículo 8° del mentado decreto, disponiéndose la notificación de la accionada a través de correo electrónico, petición en la que fue reiterativo, y que, en efecto llevó a cabo el 25 de enero de 2021, pero sin arrimar la prueba de recepción de esa notificación.

Que en respuesta a lo anterior, el Juzgado de primer grado autorizó en cierta medida lo solicitado, pero no la notificación señalada en el artículo 8° del Decreto 806 de 2020, sino la establecida en el numeral 2° del artículo 291 CGP, norma que a su juicio, tampoco aplica en materia laboral, resaltando que, aquella disposición únicamente alude al envío de la de la citación para la comparecencia a notificarse, empero, el profesional que representa los intereses de la parte actora entendió otra cosa y terminó haciendo la notificación en forma diversa a lo ordenado por el Despacho.

A renglón seguido, apuntó que el artículo 8° del Decreto 806 de 2020 contempla que las notificaciones personales también podrán realizarse mediante mensaje de datos, tornándose como una excepción a la forma de notificación establecida en la norma especial (Art. 41 CPLSS), que solo se justificaba en época de confinamiento, lo que explica el hecho de que el Juzgado hubiere ordenado la remisión de la citación personal a través de correo electrónico, por lo que no podía la parte haber efectuado la notificación excepcional a la que alude el mencionado decreto, proceder con el que vulneró el debido proceso al configurarse la indebida notificación.

Expuso que, el 11 de febrero de 2021 la parte actora solicitó al Juzgado tener por notificada a la parte accionada, en cumplimiento de lo ordenado en enero de 2020, pese a que, en efecto, realizó la diligencia el 5 de febrero de 2021, generando un estado de confusión en la demandada con órdenes distintas y contradictorias, definiéndose en Auto No. 044 del 25 de marzo de 2021 que la parte accionada se entendió notificada en los términos del Decreto 806 de 2020, para seguidamente tener por no contestada la demanda, determinación que iba en contravía de lo señalado por el propio Despacho, puesto que, en la providencia anterior no fue ese el trámite autorizado por cuenta del Juzgado, dándose entonces la indebida notificación, devenida de la mezcla incorrecta de disposiciones procesales, en tanto a la fecha se desconoce la normativa con base en la cual se llevó a cabo la notificación, circunstancias que a la postre causaron confusión en la accionada, impidiendo la notificación y subsiguiente participación dentro del proceso.

Por último, anotó una actitud omisiva del Juzgado, en la medida en que, a pesar de las falencias cometidas, como la indebida notificación y la parálisis del proceso por más de nueve (9) meses, no realizó apremios a la parte actora, incumpliendo con ello el deber de impulsar oficiosamente el proceso y ocuparse de las actuaciones correspondientes. Por lo expuesto, solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación vía correo electrónico realizada a su representada, ordenándose que se proceda nuevamente con el trámite de notificación del auto que admitió la demanda y el correspondiente traslado (Archivo 30 ED).

Al correr traslado a la parte actora de la nulidad propuesta por la demandada, aquel extremo mostró oposición a su prosperidad, manifestando de entrada que la solicitante ni siquiera expuso causal alguna de nulidad, hecho respecto del cual señaló, no hubo vulneración al derecho de defensa, como quiera que dentro del expediente reposan las notificaciones realizadas, extrayéndose por el contrario, su falta de interés para acudir al Despacho, aunado a que, en atención a la pandemia habida se expidió el Decreto 806 de 2020

que autorizó claramente las notificaciones mediante correo electrónico, prescindiéndose de citaciones y aviso.

Adujo que hubo una actuación de mala fe de la demandada, ya que pese a estar probado el cumplimiento de la carga procesal de notificación, y a sabiendas de la existencia del actual proceso, no quiso presentarse al Juzgado para notificarse de la demanda, con lo que ha dilatado y desgastado el aparato judicial, postura que ha empleado incluso en otros asuntos en los que ha sido convocada como accionada.

Por último, alegó que, la inconformidad del memorialista tiene que ver con la legalidad y constitucionalidad de la ley, punto distinto al escenario procesal del litigio laboral, siendo así que lo que debe demandar es la constitucionalidad del precepto legal, y no obstaculizar el curso del proceso.

PROVIDENCIA APELADA

Al pronunciarse sobre la petición anulatoria propuesta por la parte demandada, el A *quo* consideró que, si bien era cierta la situación esbozada por el memorialista, relativa a las falencias halladas en la citación y aviso para la notificación personal, como quiera que en las comunicaciones libradas se anunciaba como dirección del Juzgado el Edificio Banco de Londres, cuando en realidad este despacho se ubica en el piso 6° del antiguo Edificio del ICETEX.

Expuso que con ocasión del estado de emergencia declarado en razón de la pandemia generada por el virus COVID-19, se expidió el Decreto 806 de 2020, mediante el cual se implementó la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, norma que en su artículo 8° reguló el tema de notificaciones, y que, invocando su contenido, la parte interesada petitionó autorización para gestionar la notificación a través de correo electrónico, allegando la respectiva constancia el 25 de enero de 2021, diligencia avalada en decisión del 23 de marzo de esa anualidad por haber cumplido con las previsiones de aquella norma, actuación con la que perdieron relevancia las inconsistencias anotadas en las citaciones y emplazamiento, puesto que por estos medios no se tuvo por notificada a la parte, sino en virtud de las diligencias derivadas de la aplicación del citado decreto, a lo que debe sumarse que era de conocimiento de la parte actora la expedición de varias providencias en el curso del proceso en procura de cumplir con su notificación, empero ninguna gestión adelantó para hacerse parte del proceso.

De otro lado, anotó el Juzgador que las normas de procedimiento son de orden público con efecto general inmediato, citando como refuerzo de sus argumentos el transito legislativo del artículo 624 CGP para mencionar que las notificaciones se surten con base en la ley vigente cuando comenzaron a efectuarse. En consecuencia, al considerar que el acto de notificación efectuado surtió efectos con base en lo señalado en el Decreto 806 de 2020, concluyó el rechazo de la nulidad propuesta (Archivo 36 ED).

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior determinación el apoderado judicial de **TOUCHSTONE GOLD HOLDINGS S. de R.L.** interpuso recurso de apelación, manifestando que, pese a las irregularidades anotadas por el Juzgado dentro del trámite de notificación, decidió rechazar la nulidad formulada, frente a lo cual indicó una equivocación del Juzgador en la medida en que es su obligación efectuar el control de legalidad al proceso como director del mismo, que, de haberla cumplido, habría evidenciado que tanto por la parte como por el Juzgado se tramitó indebidamente la notificación, pues la primera terminó realizando algo diverso a lo ordenado por el Despacho, como quiera que este dispuso el envío por correo electrónico de la citación para notificación personal, precisión que, pese a que pudo devenir de una equivocación del funcionario, finalmente la parte realizó la notificación de manera

diferente, lo que impidió a la parte demandada contestar la demanda, dado que se generó confusión en la empresa, razón por la que tampoco dio respuesta a la demanda.

Por otra parte, adujo que no procedía el rechazo de plano del incidente (Art. 130 CGP), como quiera que fue sustentado en la causal 8° del artículo 133 CGP y no fue presentado por fuera del término, atacando no el hecho de que la notificación pueda surtir en virtud de lo consagrado en el decreto, sino en razón de la diferencia entre lo ordenado por el Juzgado y lo ejecutado por la parte, como quiera que, el envío de la citación para notificación implica un término para acercarse al Juzgado y notificarse, mientras que, en la actuación desplegada por la parte, después de recepcionado el correo electrónico, comienza a correr el término para contestar la demanda, situaciones que comprenden entonces, connotaciones jurídicas distintas, lo cual no fue advertido por el Despacho y dejó sin oportunidad a la pasiva de contestar la demanda y aportar información o pruebas a fin de que el Juez confronte la postura de las partes y decida.

Así mismo, reiteró que no podía rechazarse de plano su solicitud, pues además de lo expuesto, relató en orden cronológico los hechos ocurridos y que dan pie a alegar la violación al debido proceso, sin que dentro de su argumentación depreque la nulidad del auto admisorio.

De otro lado, reiteró las imprecisiones contenidas en la citación para notificación personal remitida antes de la pandemia, en cuanto a la dirección donde quedaba ubicado el Juzgado, error que se replicó en el aviso enviado, pese a que el aviso no procede en materia laboral, aunado a las falencias en el trámite de emplazamiento que por ciertos pasajes cruza el trámite del proceso civil, diligencia que finalmente no agotó el demandante.

Que, luego de nueve (9) meses paralizado el proceso, el extremo activo solicitó autorización para notificar conforme la regulación del Decreto 806 de 2020, actuación que, manifestó haber efectuado, aunque no aportó la prueba de recepción del correo electrónico, según lo señalado en la Sentencia C-420 de 2020. En ese sentido, dijo que, en auto de 2021, reiteró, el Juzgado autorizó el envío de la citación para notificación personal del auto admisorio de la demanda, esperando entonces que se evidenciara que la actuación de la parte fue contraria a lo ordenado por el Juzgado, siendo allí y no en los intentos de notificación anteriores donde descansa la solicitud de nulidad, pues la Juez en su momento realmente no autorizó la aplicación del decreto, aunado a que, contrario a lo señalado en la providencia apelada, el representante legal de la empresa sí acudió a notificarse a la dirección del Juzgado proporcionada de manera errada.

Por último indicó que, a pesar de lo señalado en el artículo 624 CGP y la Ley 153 de 1887, su queja radica en lo ordenado por el Juez en el auto que dispuso la remisión por correo electrónico de la citación para acudir al despacho, y lo que efectivamente se cumplió por la parte, aclarando que la expedición del Decreto 806 de 2020 no prohibió seguir realizando las notificaciones al tenor del CPLSS, por lo que, en el presente caso, indicó, ameritaba la expedición de otra decisión en la que corrigiera la orden impartida en los términos del decreto, previo control de legalidad, sin que pueda pretenderse, como lo insinúa el Juzgado, colegir que no hubo equivocación, pasando por encima de lo ordenado, la Constitución y la Ley (Archivo 37 ED).

Mediante Auto No. 608 del 18 de agosto de 2022 se concedió la apelación (Archivo 38).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto del 23 de enero de 2023 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones, sin embargo, dentro del término legamente otorgado las partes guardaron silencio (Archivo 02 ED).

PROBLEMA (S) A RESOLVER

El problema jurídico se centra en establecer si es procedente declarar la nulidad a partir de la notificación efectuada a la sociedad **TOUCHSTONE GOLD HOLDINGS S. de R.L.**, en los términos del decreto 806 de 2002 y, en consecuencia, debe disponerse efectuar nuevamente la notificación a dicha parte, otorgándole el término para que proceda con la contestación de la demanda.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en atención a lo reglado en el numeral 5° del artículo 65 del CPTSS, el auto atacado es susceptible del recurso de apelación pues a través del mismo se rechazó el incidente de la nulidad formulado por **TOUCHSTONE GOLD HOLDINGS S. de R.L.**, de ahí que esta Sala de Decisión sea competente para dirimir el presente asunto, para lo cual, se seguirán los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPTSS, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Sea lo primero resaltar, frente a la insistencia que muestra la parte apelante en sus diversos escritos en torno a la notificación de procesos en la especialidad laboral, que si bien el artículo 41 CPLSS contempla la forma en que deben agotarse las diversas providencias en los litigios de esta naturaleza, la codificación adjetiva laboral se queda corta en punto de la regulación específica de la forma en que deben materializarse las distintas modalidades de notificación, por lo que en atención al artículo 145 CPTySS, se debe acudir a la norma general, esto es, el artículo 291 CGP en cuanto a las previsiones de la forma como se debe ejecutar el trámite de la notificación personal, la que, en caso de no ser próspera, echa mano del mecanismo del aviso que, en el ámbito procesal laboral, tiene una connotación distinta a la del trámite civil, pues en la primera especialidad solo contiene un objetivo citatorio, según el contenido del artículo 29 CPLSS, el cual, de no llegar a generar el resultado esperado, conforme el mismo articulado, da lugar a designar curador y proceder con el emplazamiento.

En esos términos lo ha aclarado la Sala de Casación Laboral de la CSJ, por ejemplo, en el Auto AL2172-2019 donde indicó:

“(…) En todo caso, como el estatuto procesal del trabajo no dispone la forma específica como se debe surtir la notificación personal, se acude en este aspecto a lo que consagra el artículo 291 del CGP, en el sentido de que se remita una citación a la demandada a través del servicio postal autorizado, en donde se informe de la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que se debe notificar, previniéndolo para que comparezca a la sede judicial a recibir la respectiva notificación.

(…)

Pero todo no termina allí, pues si no se logra materializar ese evento, el Tribunal debe proceder a tramitar el mecanismo del aviso, siguiendo las directrices generales del procedimiento laboral, en este caso, el artículo 29 del CPT y de la SS, interpretándolo y ajustándolo a los requerimientos del trámite especial.

En tal sentido, se deberá informar al convocado que una vez cumplido dicho trámite (el del aviso) y transcurrido el término de diez (10) días que allí se prevé, sin que se logre su comparecencia para notificarlo personalmente, se le designará curador para la litis, ordenando a su vez el emplazamiento por edicto.

Además, como lo ha venido sosteniendo la Sala, en materia laboral no existe como tal la notificación por aviso, pues éste es tan solo un mecanismo de llamamiento o citación que se acompaña con lo previsto en el artículo 29 del CPT y de la SS, en el que se obliga perentoriamente al nombramiento del auxiliar de la justicia con quien debe surtir la notificación personal del auto admisorio de la demanda, en caso de que el demandado no comparezca, no sea hallado o se impida su notificación. (…)”.

No obstante, el modelo de notificación conocido en Colombia, implantado por los estatutos procesales, a saber, Código General del Proceso y Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para el caso que nos ocupa, a raíz de la pandemia generada por el COVID-19 sufrió modificaciones que iban a ser temporales inicialmente, dado que el Gobierno Nacional el 06 de junio de 2020 con el propósito de agilizar los trámites judiciales y flexibilizar la atención de los usuarios a la administración de justicia, expidió el Decreto 806, buscando fortalecer el uso de las tecnologías de la información en el trámite judicial, trámite que con algunas modificaciones, pasó a ser legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022.

Justamente, el artículo 8 del citado Decreto estableció que “(...) las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual (...) La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. (...)”

De esta manera, las formas de notificación contempladas en los artículos 29 y 41 CPLSS, en concordancia con los artículos 291 y 292 CGP, deben acompañarse con lo establecido en el Decreto 806 de 2020, normativa que priorizó la virtualidad, indicando que, sólo en casos excepcionales se impondría la presencialidad; notificación que superó el examen de constitucionalidad realizado por la Guardiania de la Carta Magna según lo expuso en la C420-2020.

Ahora, en el presente asunto el recurrente insiste en que debe invalidarse el trámite de notificación en el marco del mentado Decreto, puesto que en su caso, además de haberse iniciado la gestión de notificación con base en lo señalado por el artículo 41 CPLSS en concordancia con el CGP; el paso a la senda procesal atendida por el demandante, para efectuar la notificación de la empresa accionada, en virtud de la normatividad expedida en el marco de la pandemia, no fue una actuación que hubiere sido autorizada por el Juzgado, pese a que fue solicitada por la parte interesada, situación que alegó, generó confusión, en tanto lo ordenado en respuesta a la solicitud de la parte actora, fue la remisión por correo electrónico de la citación para notificación personal en los términos del numeral 2° del artículo 291 CGP, irregularidad que insiste, vulnera sus garantías procesales y de defensa, como quiera que más adelante fue avalada la notificación efectuada por la parte actora, teniéndose como enterado de la existencia del litigio en su contra, y ante la falta de pronunciamiento, se tuvo por no contestado el gestor.

Visto lo anterior, dentro de las actuaciones surtidas en el particular, observa la Sala que, admitida la demanda por Auto 1499 del 23 de septiembre de 2019 (Archivo 04 ED), se emprendió por cuenta del extremo activo la gestión de notificación, iniciando con la remisión de la citación para notificación personal reglada por el artículo 291 CGP, recepcionada por la accionada el 4 de octubre de 2019, según constancia emanada de la empresa de correos a través de la cual se materializó el envío. Luego, el aviso en los términos del artículo 29 CPLSS también fue diligenciado, y el mismo se arrió a las instalaciones de la sociedad el 28 de octubre de 2019 (Archivo 05 ED).

Los anteriores esfuerzos anota la Sala, no tuvieron efectividad en torno a logro de la comparecencia efectiva de la parte accionada, por lo que, a través de Auto No. 1577 del 26 de noviembre de 2019, el Juzgado de primer grado ordenó su emplazamiento y la designación de curador *Ad-Litem* para representar sus intereses, entregando el edicto correspondiente para su respectiva publicación (Archivo 06 ED); sin embargo, importa relieves, no se observa que el mismo hubiere sido publicado, o al menos de ello no hay prueba en el expediente.

Transcurrido el tiempo, a partir del mes de agosto de 2020, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus del SARS-COV2 (Covid 19), y encontrándose en plena vigencia el Decreto 806 de 2020, el apoderado del señor **CRISTIAN PORTILLA PLAZA** deprecó

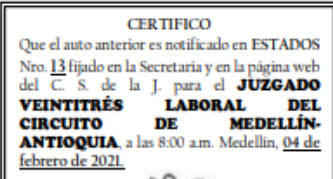
autorización para tramitar el emplazamiento a la luz de dicha normativa (Archivos 08 ED). No obstante, en escritos subsiguientes, petitionó que, en aplicación del artículo 8° ibídem, se efectuara la notificación del auto admisorio a través del correo electrónico registrado por la empresa en su certificado de existencia y representación legal (Archivos 09 a 12 ED).

En respuesta a las múltiples solicitudes impetradas por el mandatario de la parte accionante, el Juzgado emitió el Auto No. 039 adiado 27 de enero de 2020 (sic) (la providencia fue notificada el 4 de febrero de 2021) en el que indicó (Archivo 13 ED):

A través de memorial recibido vía correo electrónico, el apoderado de la parte accionante solicita autorización para notificar por el correo electrónico que la entidad accionada tiene registrado en el certificado de cámara de comercio, toda vez que previo a ello se realizaron diversos intentos de notificar en la dirección para notificaciones judiciales inscrita en el mismo documento, con resultados fallidos.

Al aludir a la notificación personal, el artículo 291 del Código general del Procesal determinó en el numeral 2º que las personas jurídicas de derecho privado y los comerciantes inscritos en el registro mercantil deberán registrar en la Cámara de Comercio o en la oficina de registro correspondiente del lugar donde funcione su sede principal, sucursal o agencia, la dirección donde recibirán notificaciones judiciales y, con el mismo propósito, deberán registrar además una dirección electrónica.

Así las cosas, resulta procedente la petición elevada, motivo por el cual se autoriza a la parte demandante el envío de la citación para notificación personal del auto admisorio de la demanda a través del E-mail que la accionada tiene registrado en la Cámara de Comercio, esto es, cgl@touchstonegoldholdings.com. Una vez realizada, se aportará la página impresa de la dirección electrónica que acuse el recibido o constancia de la que se desprenda la entrega de dicha citación.



En contraste con lo señalado, en memorial arrimado el 11 de febrero de 2021 el mandatario del actor informó haber efectuado la notificación de la accionada mediante correo electrónico, adjuntando la certificación de envío con el acuse de recibo respectivo en la dirección electrónica de **TOUCHSTONE GOLD HOLDINGS S. de R.L** (Archivo 24 ED):

**e-entrega**
Acta de envío y entrega de correo electrónico

e-entrega Certifica que ha realizado el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de e-entrega el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

| | |
|----------------------|--|
| Id Mensaje | 83574 |
| Emisor | alexvalenciaabogadolitigante@gmail.com |
| Destinatario | cgl@touchstonegoldholdings.com - TOUCHSTONE GOLD HOLDINGS S. DE R.L. Nit 900298295-1 |
| Asunto | NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEMANDADA RAD. 05 001 31 05 023 2019 00924 00 JUZGADO 23 LABORAL CIRCUITO DE MEDELLÍN |
| Fecha Envío | 2021-02-05 13:58 |
| Estado Actual | Acuse de recibo |

Trazabilidad de notificación electrónica

| Evento | Fecha Evento | Detalle |
|---------------------------------------|---------------------|---|
| Mensaje enviado con estampa de tiempo | 2021/02/05 14:01:41 | Tiempo de firmado: Feb 5 19:01:41 2021 GMT Política: 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.1.6. |
| Acuse de recibo | 2021/02/05 14:05:33 | Feb 5 14:01:44 cl-t205-282cl postfix/smtp [1151]: 5B4E712484F3: to=< cgl@touchstonegoldholdings.com >, relay=aspmx.l.google.com[172.217.192.26]: 25, delay=3.4, delays=0.14/0.1.9/1.3, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK 1612551704 u15si7834989wmj.73 - gsmtpl) |

En dicha notificación, en efecto, se informó:

Señores

TOUCHSTONE GOLD HOLDINGS S. DE R.L. Nit 900298295-1

ASUNTO: NOTIFICA AUTO QUE ADMITIÓ DEMANDA - ENVÍO DEMANDA Y ANEXOS

Por medio de la presente, notifico Auto que ADMITIÓ DEMANDA en su contra de fecha 23 de septiembre de 2019, dentro del proceso con radicado 05 001 31 05 023 2019 00924 00 del juzgado 23 Laboral del Circuito de Medellín.

El correo electrónico del Despacho judicial es j23labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Parte demandante: CRISTIAN PORTILLA PLATA

Parte demandada: TOUCHSTONE GOLD HOLDINGS S. DE R.L. Nit 900298295-1

Atendiendo lo establecido en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 y autorización de notificación por correo electrónico emitido por el juzgado 23 laboral del circuito de Medellín mediante auto del 27 de enero de 2021, le informo que la notificación personal se entenderá surtida una vez recibido este mensaje y los términos empezarán a correr al día siguiente de esta notificación.

Se le pone de presente que el término de traslado para contestar la demanda se entenderá surtido transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío de esta comunicación, finalizado este podrá dar respuesta a la demanda en el término de diez (10) días hábiles.

Con base en tal evidencia, en Auto No. 250 del 23 de marzo de 2021 el *A quo* tuvo como notificada a la pasiva, y al no haber arrimado escrito pronunciándose sobre la demanda, la dio por no contestada.

Vista la remembranza fáctica que antecede, lo cierto es que, como lo consideró el Juez de primer grado, pese a la existencia de crasas anomalías en el curso de los intentos de notificación agotados en virtud de los artículos 291 y 292 CGP, en armonía con los artículos 29 y 41 CPLSS, lo cierto es que, los mismos no tuvieron incidencia de cara a la decisión de tener a la demandada como notificada y dar por no contestada la demanda, dado que ninguno de estos esfuerzos para lograr su concurrencia al proceso consiguió tal objetivo, resultando innecesario estudiar si, a partir de las imprecisiones en las que se incurrió en estas etapas, se violentaron las garantías procesales de la demandada, dado que ninguna consecuencia negativa a sus intereses se observa de su trámite.

Ahora, el meollo del asunto radica es en lo que viene con posterioridad a los intentos de notificación conforme los parámetros del CGP, esto es, en vigencia del Decreto 806 de 2020, precepto de cual el demandante solicitó reiteradamente su aplicación, en especial, para que por virtud de este se autorizara la notificación personal del auto admisorio a través de la dirección electrónica de la accionada, según lo previsto en el artículo 8° de ese compendio.

Frente a ello, anota la Corporación, el Juzgado emitió, como se dijo en líneas anteriores, una decisión en la que, indicó: “(...) *Así las cosas, resulta procedente la petición elevada, motivo por el cual se autoriza a la parte demandante el envío de la citación para notificación personal del auto admisorio de la demanda a través del E-mail que la accionada tiene registrado en la Cámara de Comercio, esto es, cgl@touchstonegoldholdings.com. Una vez realizada, se aportará la página impresa de la dirección electrónica que acuse el recibido o constancia de la que se desprenda la entrega de dicha citación. (...)*” (Archivo 13 ED), misma que sirvió de sustento para que el demandante efectuara la notificación personal conforme los lineamientos del Decreto 806 de 2020.

Sin embargo, más allá de la insistencia de la parte por querer hacer notar la configuración de una anomalía con la potencialidad de anular parcialmente el proceso, y pese a que la redacción de la providencia en comentario no resulta ser la más afortunada, como quiera que dentro del sustento utilizado cita el contenido del artículo 291 CGP, lo cierto es que esta no puede ser observada de manera aislada, dejándose de lado el contexto normativo o la fase procesal en la que se encontraba la contienda que llevó a la emisión de aquella decisión.

Lo anterior porque, en primer término, según quedó visto, las diligencias para la notificación fundamentadas en la normativa en comento ya habían sido agotadas sin alcanzar su cometido. En segundo lugar, la providencia descrita surge en respuesta a la solicitud elevada por la parte demandante que procuraba la autorización para notificar vía correo electrónico según lo establecido en el decreto emitido en el marco del estado de emergencia, pues tanto es que, en el cuerpo del auto se indicó “(...) resulta procedente la petición elevada (...)”, dando a entender que podía el solicitante ejecutar el trámite pedido, como en efecto lo hizo, sin que pueda decirse, como lo sostiene el apelante, que el extremo activo desplegó una actividad no autorizada por el Juzgado.

Desde este escenario, no resulta lógico colegir que, el agotamiento de las diligencias a través del correo electrónico, pese al *lapsus* en el que pudo incurrir el Despacho, tenían como fin único remitir una citación para notificación personal en atención a lo dispuesto por el artículo 291 CGP, como quiera que, itera la Sala, el intento con miras a comunicar la existencia del proceso a la demandada con base en aquel parámetro legal, estaba consumado, ya que, incluso, por esta vía se alcanzó a remitir el aviso (con fines citatorios) y a disponer el emplazamiento de la demandada, no siendo propio, **por el estado del proceso mismo, y sumado a la vigencia de las previsiones del Decreto 806 de 2020**, insistir en dicha modalidad de notificación, máxime a que, toda la información remitida (citaciones, avisos y mensaje de datos), ha sido recibida por su destinatario, o por lo menos eso es lo que da a entender el apoderado de la accionada en sus manifestaciones.

De ahí que las consideraciones que preceden respaldan la decisión del Juzgador de primer grado en torno a la inexistencia de la nulidad procesal esbozada por la demandada. En este punto, cumple recordar que el citado Decreto 806 de 2020 en la parte final del artículo 8° contempla que: “(...) cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso. (...)”; no obstante, en parte alguna la sociedad llamada a juicio invoca falencias en la notificación acaecida mediante mensaje de datos por fuera de lo expuesto anteriormente, argumentos a partir de los cuales pudiera la Sala verificar el trámite agotado, pues desde el principio, su ataque estuvo dirigido a que el demandante no podía notificarla por este medio, idea superada con lo argumentado atrás.

Ahora, en lo atinente al rechazo de plano del incidente de nulidad decidido por el A quo, al tenor del artículo 130 CGP “(...) El juez rechazará de plano los incidentes que no estén expresamente autorizados por este código y los que se promuevan fuera de término o en contravención a lo dispuesto en el artículo 128. También rechazará el incidente cuando no reúna los requisitos formales (...)”. De igual forma, resáltese que, en materia específica del régimen de nulidades, el inciso 4° del artículo 135 reza que “(...) El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación (...)”.

En ese caso, siendo el incidente de nulidad “(...) un mecanismo encaminado a salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso (...)” (Auto A-068 de 2007), habiéndose sustentado en la causal contenida en el numeral 8° del artículo 133 CGP (indebida notificación), presentado de manera tempestiva, advierte la Sala que, en efecto, el Juzgado cognoscente decidió de fondo la nulidad propuesta, negándola porque, a su juicio, no se configuró la causal alegada, más no porque fuese improcedente tal solicitud, caso en el que, procedía, no el rechazo de plano, sino la negativa de la anulación propuesta.

En consecuencia, si bien comparte la Sala el hecho de no hallar configurada la causal de nulidad invocada por la parte demandada, se modificará lo pertinente en el sentido de

precisar la denegación de la nulidad propuesta por la sociedad **TOUCHSTONE GOLD HOLDINGS S. de R.L.**

Las costas de esta instancia están a cargo de la demandada, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a medio (1/2) SMLMV.

Sin que sean necesarias más consideraciones, **LA SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el numeral **PRIMERO** del Auto No. 525 del 4 de agosto de 2022, proferido por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de precisar que lo que corresponde es **DENEGAR** el incidente de nulidad propuesto por **TOUCHSTONE GOLD HOLDINGS S. de R.L.**, decisión que se reafirma conforme a las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: Las **COSTAS** en esta instancia están a cargo de la demandada, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente a medio (1/2) SMLMV.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 034 del 28 de febrero de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>